

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500920140132402
Proceso:	Ordinario
Demandante:	MARIA ELOISA SANCHEZ DE ALVAREZ
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	21/10/2022
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 24/10/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	MARIA ELOISA SÁNCHEZ
DEMANDADAS	COLPENSIONES
INTERVINIENTE AD EXCLUDENDUM	LINA MARÍA SALAZAR MEJÍA
LITSI CONOSORTES NECESARIOS POR PASIVA	POSITIVA S.A.; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL; CONTRIBUCIONES PARAFISACALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP-; NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO
ORIGEN	Juzgado Noveno Laboral Circuito de Medellín
RADICADO	05 001 31 05 009 2014 01324 02
TEMAS	Pensión de sobrevivientes
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARIA ELOISA SÁNCHEZ contra COLPENSIONES, al que fue integrado como interviniente ad Excludendum la señora LINA MARÍA SALAZAR MEJÍA, y como Litis Consortes Necesarios por Pasiva, POSITIVA S.A., UGPP y NACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO.

En atención al memorial remitido el 29 de junio de 2022¹ y a la escritura pública N° 3181 del 12 de diciembre de 2019, se reconoce personería como apoderada general para representar los intereses de Positiva Compañía de Seguros S.A. a la abogada Luisa Fernanda Cabrejo Felix, identificada con CC. 52.201.373. y TP 136.604 del C.S de la J, quien a su vez concedió poder a la sociedad JURIDICA ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. identificada con NIT 900944440-3, quien actúa en el presente procesos a través del abogado Emerson Isaac Mercado Villalba, identificado con CC. 73.182.827 y TP. N° 197.830 del C. S. de la J., quien se encuentra inscrito en el Certificado de Existencia y

¹ 02SegundsInstancia; 11memorialPoder.pdf

Representación Legal de la sociedad. En razón de ello, se entienden revocados los poderes y sustituciones concedidos con anterioridad por la entidad.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda²

La señora Maria Eloisa Sánchez demanda contra Colpensiones pretendiendo **i)** el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de Manuel José Álvarez, su hijo, desde el 6 de noviembre de 2019, **ii)** Intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, y **iii)** costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que Manuel José Álvarez fue su hijo y del señor Pedro José Álvarez, y aquel disfrutó pensión de invalidez reconocida por parte de Colpensiones hasta el 27 de febrero de 2004, fecha en que falleció; cuenta además que su hijo fue casado por los ritos católicos con la señora Lina María Salazar Mejía el 21 de junio de 2003, unión de la cual no se procrearon hijos, y vivieron siempre en casa materna, puesto que éste siempre le brindó sostenimiento económico, brindándole todo lo necesario para alimentación, vestuario, medicina y otros gastos.

Tiene conocimiento de que la señora Lina María Salazar se presentó ante el extinto Instituto de Seguros Sociales a reclamar sustitución pensional, la cual fue denegada por haber acreditado solo una convivencia de 8 meses.

La demandante solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia por el fallecimiento de su hijo, indicándole la entidad en respuesta que se encontraba en recibo de expedientes pensionales, y una vez se verificara la base de datos se procedería a estudiar lo pretendido.

El Juzgado de Instancia emitió una primera sentencia³, y al conocer esta Corporación del proceso en sede de consulta y apelación, declaró la nulidad de lo actuado disponiendo la integración de la Litis por pasiva con Positiva S.A., UGPP, y la Nación – Ministerio de Trabajo al estar adscrito al FOPEP⁴; quienes fueron debidamente integradas por el Juez a Quo en cumplimiento de lo ordenado⁵.

Oposición a las pretensiones de la demanda: quienes conforman la Litis por pasiva se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

² 02Expediente.pdf págs. 4/5

³ 02Expediente.pdf págs. 81/84

⁴ 02Expediente.pdf págs. 112/113

⁵ 02Expediente.pdf págs. 116/117

Colpensiones⁶

Argumenta que la demanda carece de fundamentación fáctica y legal, toda vez que la demandante no ha demostrado que efectivamente hubiera convivido con el causante durante los años anteriores a su fallecimiento. Formuló como excepciones: inexistencia del derecho y de la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez por falta de requisitos legales, improcedencia de intereses moratorios, cobro de lo no debido, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción, la que llamó “genérica o innominada” e improcedencia de la indexación de las condenas.

La Nación – Ministerio De Trabajo⁷

Refiere que la UGPP asumió como sucesora de Positiva S.A. la competencia de obligaciones pensionales y prestaciones, entre ellas, el reconocimiento y pago de pensiones de invalidez de origen profesional, que en su momento fueron reconocidas por el extinto ISS, como el asunto bajo estudio, de manera que la entidad no tiene dentro de sus funciones el reconocimiento, pago, ni sustitución de pensiones. Adicionalmente, indica que de conformidad con el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, el FOPEP únicamente tiene la función de pagaron de pensiones reconocida por la UGPP, así como de las demás entidades subrogadas en el pago, correspondiéndole a éstas, reportar las novedades de nómina al consorcio FOPEP, quien cancela mensualmente el valor de la mesada reportada, o en su defecto suspende provisional o definitivamente el pago de la misma, más no reconoce o desconoce derechos reclamados, por lo cual las entidades no tienen legitimación por pasiva respecto del proceso. Propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa, inexistencia de la obligación y la que llamó “innominada”.

UGPP⁸

Indica que no le consta quiénes son los padres del causante, ni si éste y la señora Lina María Salazar Mejía contrajeron matrimonio, toda vez que la entidad no cuenta con expediente administrativo para acceder a la documental de la solicitud de la prestación económica. Excepcionó: inexistencia de la obligación y prescripción.

Positiva S.A.⁹

Acepta que el causante, señora Manuel José Álvarez estaba pensionado por invalidez por la antigua ARP ISS, por accidente de trabajo, pero niega que la señora María Eloísa Sánchez tenga derecho a la prestación deprecada, puesto que al elevar solicitud de la prestación la señora Lina María Salazar en calidad de cónyuge, esta manifestó que solo vivía con el causante y sus hijos, y que éste pagaba el arriendo y ella el mercado y los servicios, por lo que no está demostrada la dependencia económica que se predica en la demanda, tampoco hay lugar a reconocer la prestación a la cónyuge puesto que esta solo convivió con el causante 8 meses. Excepcionó: inexistencia de dependencia

⁶ 02Expediente.pdf págs. 37/41

⁷ 02Expediente.pdf págs. 145/153

⁸ 02Expediente.pdf págs. 166/170

⁹ 02Expediente.pdf págs. 203/212

económica, ausencia de causa para demandar, enriquecimiento sin justa causa, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, prescripción y la que denominó “genérica o innominada”.

Aun cuando la señora Lina María Salazar Mejía se notificó del auto admisorio de la demanda en calidad de interviniente ad Excludendum¹⁰, se abstuvo de comparecer al proceso.

Sentencia de primera instancia¹¹

El 6 de diciembre de 2019, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando que a la señora María Eloisa Sánchez de Álvarez le asiste derecho a la pensión de sobrevivencia causada por su hijo Manuel José Álvarez, quien era pensionado por invalidez de origen profesional. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de septiembre de 2011. Condenó a la UGPP a reconocer y pagar la prestación en favor de la demandante en calidad de madre, cuyo retroactivo liquidado entre el 24 de septiembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2019 equivale a \$75'758.014, y a continuar reconociendo la prestación a partir del 1° de diciembre de 2019 en la suma de \$828.116 sin perjuicio de los incrementos de ley, con las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, así como la indexación del retroactivo.

Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de Positiva S.A. y Ministerio del Trabajo y absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra. Condenó en costas a la UGPP y en favor de la demandante, fijando agencias en derecho en la suma de \$12'421.740; igualmente condenó en costas a la demandante en favor de Colpensiones en la suma de ½ SMLMV.

Adicionó la sentencia en cuanto autorizar a la UGPP realizar el descuento por aportes en salud, del retroactivo a conceder a la parte demandante.

Para decidir consideró en primer lugar, que al verificar que el causante se encontraba pensionado por invalidez por parte del extinto ISS desde el año 2004, esto es, en momento anterior a la sesión del negocio jurídico de la administración del riesgo laboral por parte del ISS, y al haber quedado a cargo de Positiva S.a. las obligaciones suscitadas con posterioridad tal sesión, el reconocimiento prestacional de carácter profesional que dejara causado el causante es UGPP. De otro lado consideró acreditado el requisito de dependencia económica de la demandante respecto de su hijo, ya que éste le proporcionaba recursos significativos para su sostenimiento, en virtud de que el precedente judicial prevé que la dependencia económica exigida, no tiene que ser total y absoluta.

¹⁰ 02Expediente.pdf pág. 55

¹¹ 02Expediente.pdf págs. 255/256

Declaró prescritas las mesadas causadas con antelación al 24 de septiembre de 2011 dado que el acto administrativo mediante el cual se niega la prestación fue notificado el 5 de mayo de 2009, contando la demandante con 3 años para promover la acción judicial, la cual solo incoó el 24 de septiembre de 2014, dejando transcurrir más de 3 años, por lo que no interrumpió el fenómeno prescriptivo.

Negó los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al haber sido reconocido la prestación por interpretación judicial y por haber existido un conflicto de intereses entre dos reclamantes.

Recurso de apelación:

UGPP: inconforme con lo decidido, solicita se revoque la sentencia de instancia, argumentando para ello que: **i)** se evidenciaron inconsistencias y contradicciones en las declaraciones rendidas por la demandante en el proceso y ante Colpensiones, pues en el marco del proceso declaró que vivía cerca de su hijo en una casa donde ella pagaba arriendo, luego indicó que vivía en la casa con su hijo y la esposa de éste, señora Lina María, que no realizaba ninguna actividad que le generara ingresos, siendo su hijo el único que le colaboraba con los gastos, que era un arriendo de \$100.000 pesos; luego que también le ayudaba con alimentos y ropa; pero en interrogatorio rendido ante Colpensiones, indicó que vivía en el Municipio de Calatrava, mientras que su hijo vivía en el Municipio de La Estrella; también señaló que le arrendó una habitación a un conocido de su hijo, el cual le pagaba \$250.000 por hacerle la comida y atenderlo, además le ayudaba a su hermana realizando almuerzos, quien le reconocía entre \$1.000 a \$2.000; además se contradice la demandante con lo narrado en el escrito de demanda en el hecho 4 al afirmar que la pareja Álvarez Salazar siempre vivió en la casa materna, más indicó en este trámite que nunca vivieron en la misma casa. **ii)** Difiere además de lo concluido por el A Quo en torno a que \$100.000 era mucho para un arriendo, dado que para el año 2004 el salario mínimo ascendía a \$350.000, y con los almuerzos que realizaba la demandante con su hermana sumaba casi \$310.000, más lo que le ayudaba su hijo, resulta evidente que al ser una persona sola sin hijos a cargo ni cónyuge, podía vivir con 1SMLMV en condiciones dignas; **iii)** llama la atención en que la demandante tenía 11 hijos, por lo que se cuestiona si solo el causante era quien le colaboraba económicamente. Finalmente, **iv)** pidió se revoque la decisión respecto a las costas procesales, toda vez que las mismas provienen del patrimonio público, y estas devienen en un detrimento patrimonial de la entidad.

Alegatos en segunda instancia

Una vez corrido el traslado en esta instancia, tanto la activa, como quienes conforman la pasiva lo descorrieron oportunamente, así:

De un lado, **UGPP**¹², afirma que la pensión de sobrevivientes a la cual está obligada la ARL, es aquella prestación que se origina con la muerte de un afiliado como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y aquí quien solicita la sustitución, es en efecto un beneficiario reconocido por la ley, por ende, la entidad no está legitimada por pasiva para dar cumplimiento a la obligación, razón por la cual solicita se revoque la sentencia de instancia y se le absuelva todas las pretensiones presentadas en su contra.

Colpensiones¹³: solicita se confirme el fallo de primera instancia, en virtud que la entidad no tiene ninguna obligación respecto al reconocimiento prestacional deprecado con la demanda, en tanto la pensión de invalidez reconocida al causante dejó de estar en cabeza del extinto ISS por tratarse de una prestación por una enfermedad de origen profesional, pues mediante Resolución N° 1293 del 11 de agosto de 2008 la superintendencia Financiera de Colombia, aprobó la cesión de activos, pasivos y contratos del ISS afectos a su actividad como administradora de riesgos profesionales, en favor de la Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 1753 de 2015, y el artículo 1° del Decreto 1473 de 2015.

Finalmente, **Positiva Compañía de Seguros S.A.**¹⁴ solicitó se confirme la decisión de instancia, en virtud de que el hecho generador del posible derecho a la demandante se causó en vigencia del ARP ISS, quien mediante resolución del No 001488 de 2000 reconoció pensión de invalidez, lo cual tiene plena incidencia en las resultados del proceso, toda vez que a Positiva S.A. le fueron entregados los activos, pasivos y contratos del ISS a efectos de su actividad como administradora de riesgos profesionales, cesión que se efectivizó el 1° de septiembre de 2008, lo cual implica que desde esa fecha asumió los pasivos pensionales de tal entidad. De igual forma, indica respecto a las diferencias o valores no incluidos en el cálculo actuarial derivados en aplicación del Decreto 1437 de 2015, corresponde al FOPEP asumir tales obligaciones que deriven de los asuntos judiciales, según lo dispuesto en el artículo 108 de la ley 2008 del 2019, por ello, los pensionados que estaban a cargo de Positiva S.a., y cuyos derechos fueron causados originalmente en el ISS, por disposición legal estos casos pasan a la UGPP, siendo entonces que los valores incluidos como intereses moratorios, reliquidaciones, entre otras, corresponden a esta entidad y FOPEP tal y como lo disponen las leyes 2063 de 2020 y 2159 de 2021.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, por los puntos que fueron objeto de apelación, así como por lo dispuesto en el art. 69 del CPTSS, modificado por la Ley 1149 de 2007, y la decisión adoptada por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia con radicado 7382 de 2015.

¹² 02SegundaInstancia; 18MemorialAlegatosUGPP.pdf

¹³ 19MemorialAlegatosColpensiones.pdf

¹⁴ 21MemorialReenvioAlegatosPositiva.pdf

(1.2) 20MemorialAlegatosPositiva.pdf

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se restringe a determinar: **a)** La procedencia o no del reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la demandante con ocasión del fallecimiento de Manuel José Álvarez Sánchez, en caso de concluir que si se analizará; **b)** si la UGPP es la entidad responsable del reconocimiento de la prestación, así como **c)** las condiciones de causación y disfrute de la prestación.

No se discute que el afiliado dejó causado el derecho a la prestación en favor de sobrevivientes, por cuanto el causante, Manuel José Álvarez Sánchez, contaba con calidad de pensionado por invalidez a cargo del ISS desde el 8 de junio de 2000 por riesgo profesional.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

- María Eloisa Sánchez de Álvarez nació el 1° de febrero de 1939¹⁵.
- Manuel José Álvarez Sánchez nació el 29 de junio de 1968¹⁶ y falleció el 23 de febrero de 2004¹⁷. Fue hijo de Eloisa Sánchez Uribe y Pedro José Álvarez, y fue casado con la señora Lina María Salazar Mejía acto celebrado el 21 de junio de 2003¹⁸.
- A Manuel José Álvarez Sánchez le fue concedida pensión de invalidez de origen profesional, por parte extinto Instituto de Seguros Sociales –ISS-, mediante resolución N°001488 de 2000, a partir del 8 de junio del mismo año, en cuantía mensual de \$260.100¹⁹.
- El 3 de agosto de 2006, la demandante allegó entrega de requisitos al ISS previamente solicitados por la División Pensiones de la entidad, para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo Manuel José Álvarez Sánchez²⁰.
- Mediante auto N° 02956 del 4 de mayo de 2009, el ISS negó la pensión de sobreviviente a la demandante, indicando que ésta no se acercó a radicar solicitud de reconocimiento de la prestación²¹.
- La señora Lina María Salazar en calidad de cónyuge del causante, radicó ante el ISS solicitud de reconocimiento de sustitución pensional por el fallecimiento de este, la cual

¹⁵ 04ExpedienteAdministrativo. Archivo denominado "00529257000000008462151004501A". No se aportó registro civil de nacimiento, pero si copia de la cédula de ciudadanía que indica tal fecha y que no fue discutida por la pasiva.

¹⁶ 02Expediente.pdf pág. 9.

¹⁷ 02Expediente.pdf pág. 13

¹⁸ 02Expediente.pdf pág. 11

¹⁹ 02Expediente.pdf pág. 87

²⁰ 02Expediente.pdf pág. 93

²¹ 02Expediente.pdf págs. 101/103

fue negada mediante Resolución N°0349 del 27 de abril de 2004, por haber conviviendo con el pensionado solo 8 meses con anterioridad a su muerte²².

Declaraciones extra juicio

- Gabriel Jaime García Estrada, compareció el 11 de enero de 2005 ante la Notaría Primera de Itagüí, declaró que conoce a la señora Maria Eloisa Sánchez desde hace más de 10 años, y que esta dependía económicamente de su hijo Manuel José Álvarez, antes y después de casado²³.

- María Georgina Bedoya de Arboleda, compareció el 11 de enero de 2005 ante la Notaría Primera de Itagüí, declaró que conoce a la señora Maria Eloisa Sánchez desde hace más de 10 años, y que esta dependía económicamente de su hijo Manuel José Álvarez, a pesar de estar casado²⁴.

- Maria Eloisa Sánchez de Álvarez, compareció el 8 de febrero de 2005 ante la Notaría Primera de Itagüí, declarando ser madre de Manuel José Álvarez Sánchez ya fallecido de quien dependía económicamente de un todo y por todo²⁵.

a) La demandante como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes

La calidad de beneficiaria invocada por la demandante está regulada en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, que establece que si como consecuencia del accidente de trabajo, o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; el cual fue modificado por el artículo 13 literal, que en su literal d)²⁶, y exige la dependencia económica de los padres respecto del causante, para el momento del deceso.

En criterio de la H. Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la prestación de sobrevivientes constituye *“una garantía frente al estado de desprotección económica de un grupo de personas que no pueden subsistir con recursos propios y cuyas condiciones de existencia se encuentran ligadas a lo que proveía su descendiente fallecido”*²⁷

Esa Corporación y la H. Corte Constitucional, han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento, precisando

²² 07DocumentosPositiva; archivo denominado “UD004151791.pdf”, págs. 5/6

²³ 04ExpedienteAdministrativo. Archivo denominado “00529257000000008462151005101A”.

²⁴ 04ExpedienteAdministrativo. Archivo denominado “00529257000000008462151005201A”.

²⁵ 04ExpedienteAdministrativo. Archivo denominado “00529257000000008462151005001A”.

²⁶ D) A falta de cónyuge, *compañero o compañera permanente* e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;

²⁷ SI4599 de 2019

que tal situación **no tiene que ser total y absoluta**²⁸, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho **no puede exigirse la configuración de estados de indigencia**, pero, sí debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del peticionario se vería menoscabada.

Según lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial, precisó las siguientes sub reglas aplicables, en el estudio de estos asuntos²⁹:

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, **es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento**, de modo que, al faltar el ingreso, se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

Ha expresado esa Alta Corporación que debe entenderse por dependencia económica *“«la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio para llevar una vida digna», puntualizando que dicha condición desaparece «cuando la persona es autosuficiente, por estar en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad»*³⁰.

El concepto atiende a **“i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo”**³¹. “la dependencia de los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, pero en todo caso la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, debe ser de tal proporción que les impida valerse por sí mismos, aun cuando cuenten con recursos propios o provenientes de terceros”³².

Dicha postura, reiterada en sentencias como las SL 1016 de 2020, SL 10759 de 2020 y SL 2375 de 2020, entre otras, también enfatiza en que la dependencia económica no se

²⁸ En Sentencia C-111 de 2006, decidió “Declarar **EXEQUIBLES** los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la siguientes expresión: “*de forma total y absoluta*”, que se declara **INEXEQUIBLE**

²⁹ La línea jurisprudencial se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9 de junio de 2010 de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ratificada en las sentencias radicación N° 35.991 de 2011; N° 37.595 de 2011; N° 42.792 de 2011; SL 9640 de 2014; SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015 radicación N° 47.693 del 1 de julio de 2015, entre otras.

³⁰ Sentencia SL1219 de 2019, citando la 44601 de 2011

³¹ SI 848 de 2019, citando la SI 14923 de 2014

³² SI.4599 de 2019

desvirtúa porque los reclamantes tengan ingresos provenientes de terceros ajenos al causante del que se predica la dependencia o tengan vivienda propia.

Al tenor del art.167 del CGP, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen; en el caso, compete a la demandante demostrar que dependía económicamente de su hijo para el 23 de febrero de 2004³³, fecha de su fallecimiento.

Con la intención de formar el convencimiento judicial en este sentido, la demandante solicitó que se recibieran los testimonios de María Cecilia Muñoz Escobar, Flor María Piedrahita, Gisela del Socorro Piedrahita, Manuel José Mesa Chaverra³⁴. De ellos comparecieron flor Maria Piedrahita; Manuel José Mesa Chaverria y Maria Cecilia Muñoz Escobar. Por su parte Colpensiones y Positiva S.A. solicitaron el interrogatorio de parte de la demandante³⁵. Las personas citadas como testigos comparecieron, al igual que la demandante lo hizo para absolver el interrogatorio de parte.

De las declaraciones se extrae la siguiente información relevante:

Eloisa Sánchez -Demandante-	<p><u>Interrogatorio rendido en audiencia del 26 de octubre de 2016:</u></p> <p>En esta diligencia refirió que tuvo escasos estudios, porque quedó huérfana muy pequeña, y estudió por escuelas de Bogotá llamadas “radiofónicas”. Su cónyuge murió hace más de 15 años y siempre ha sido ama de casa. Refiere que su hijo, Manuel José Álvarez laboraba para una empresa de pinturas y quedó en silla de ruedas, y duró soltero como 3 años, luego muy pronto se casó con Lina una amiga, quien trabajaba en el Hospital La María, por lo que siempre iba a su casa a asearlo y organizarlo. Señala que solo duró 8 meses casado con Lina y no tuvieron hijos, que su hijo falleció como consecuencia de un accidente en que se golpeó la cabeza, que éste le ayudaba económicamente desde que comenzó a trabajar, él recibía el dinero y la esposa lo llevaba donde ella a llevarle el dinero con el que le podía ayudar. Aclaró que vivían en casas separadas, ella vivía en la casa de un hermano de ella, subiendo para Itagüí por Comfama y él y su esposa por Calatrava. Contó que ayudaba a una hermana suya a trabajar en un restaurante, lo hacía por colaborarle porque era de muy bajos recursos, no tenía que tomar transporte para ir hasta el lugar, y ella le daba entre \$1.000 y \$2.000 pesos diarios; su hijo le daba periódicamente cuando recibía el sueldo mensualmente, éste le daba alrededor de \$200.000; para el momento en que su hijo falleció, vivía además con Omar un amigo de sus hijos, quien le pagaba a ella alrededor de \$250.000 mensuales por hacerle de comer, y 3 hijos solteros, quienes laboraban como vigilantes y le</p>
--------------------------------	--

³³ 02Expediente.pdf pág. 13

³⁴ 02Expediente.pdf págs. 7

³⁵ 02Expédiente.pdf págs.. 41 y 211

	<p>ayudaban a ella para la comida y lo que necesitara.</p> <p><u>Interrogatorio rendido en audiencia del 6 de diciembre de 2019:</u></p> <p>Reitera que no tiene estudios, quedó huérfana a los 10 años, su mamá dejó 5 niños y ella tuvo que ayudar a criarlos. Indica que al momento del fallecimiento de su hijo, éste vivía con su cónyuge, la señora Lina, pero esta trabajaba, y después del accidente que él tuvo, siempre estaba con ellos, como ella vivía cerca pasaba todos los días a estar con él, cuando se enfermó se fue de lleno donde él, porque él veía por ella y ella por él, y aun cuando tiene más hijos, todos tienen recursos muy escasos. Su hijo solo vivió 8 meses con la señora Lina después de casados, anteriormente no habían convivido juntos. Su hijo y la cónyuge cubrían los gastos del hogar, Lina era quien recogía el dinero, y lo repartía para todos los gastos incluyendo con lo que le ayudaban a ella. Para Vivió en una casa arrendada, nunca realizó una actividad económica como independiente, su esposo había fallecido dos años antes que su hijo, y tampoco le dejó nada, no recibía subsidios por parte del Estado, ni pensión por el fallecimiento de su esposo, tuvo 11 hijos con él, quienes no le colaboraban económicamente, pues trabajaban como jornaleros y tenían su propia obligación. Al ser interrogada por los gastos que tenía con anterioridad al fallecimiento de su hijo, señaló que eran el arriendo de donde vivía que ascendía a \$100.000, y después que murió su hijo tuvo que dejar la casa porque su esposo era quien pagaba la casa, y al morirse nadie iba a pagar por él; refiere que “ellos” –no especifica quiénes- cubrían los gastos de dicho arriendo, ropa y comida. E indica que ahora ha subsistido recogiendo café esporádicamente.</p>
<p>Flor María Piedrahíta -Testigo-</p>	<p>Conoce a la demandante en razón de que fueron vecinos en el Municipio de la Estrella, vivían a una cuadra y media, conoció a su hijo Manuel, quien tuvo un accidente al haber sido atropellado por un carro y quedó parapléjico, afirma que éste siempre veló económicamente por la señora María Eloisa, lo cual le consta porque fueron muy buenos vecinos y era Manuel quien trabajaba, cuando estaba aliviadito siempre le daba la plata y llegaba con todo donde ella. Señala que escuchó que el señor Manuel después de su accidente iba a casarse con una señora llamada Lina, pero desconoce si se casaron, supo por la demandante que se fueron a vivir juntos a Calatrava, pero si sabe que convivieron solo 6 u 8 meses antes que Manuel falleciera. La demandante vivía en casa arrendada con un hijo llamado Hugo quien no trabajaba y también era muy enfermito, que era de los más pequeños de los 11 hijos que tiene vivos la demandante, quienes ya estaban organizados y tenían su propia obligación, -no recuerda con quien más vivía-,</p>

	<p>pero como la señora Lina siempre trabajaba Maria Eloisa se fue cerquita de ellos en Calatrava para poderle ayudar a él. Indica que no conoce que la demandante tenga bienes a su nombre, o que devengara algún salario, renta, pensión, ni ayuda por parte del Estado. Refiere que los ingresos para su alimentación, arriendo y vestuario los obtenía de su hijo Manuel, porque los otros hijos han sido de muy escasos recursos todos.</p>
<p>Manuel José Mesa Chaverra -Testigo-</p>	<p>Conoció a Maria Eloisa en Fredonia desde hace más de 47 años, en esa época vivía con su esposo Don Pedro y sus hijos, que también son muy amigos de él. Conoció a Manuel José Álvarez Sánchez, hijo de la demandante, quien murió por un accidente que tuvo y que lo dejó sin caminar, vivía para dicho momento en la Estrella con una señora que se había casado, -de quien no recordó su nombre-, lo cual supo por el causante, supo que vivieron juntos alrededor de 2 años; él visitó al causante cuando vivía con la demandante, pues todas las veces que lo visitaba era en la casa de “doña maruja”, nunca lo llegó a visitar cuando hizo convivencia con la esposa. Refiere que la demandante no ha tenido una estabilidad, ha estado con varios hijos, conoce que actualmente vive con su hijo Cesar, sabe que ha estado en Itagüí, Calatrava, Fredonia, La Estrella, ello debido al sostenimiento de ella, pues desde que falleció el esposo empezó a moverse, por lo que no tiene claro donde vivía ella al momento en que fallece Manuel, pero si sabe que antes de su muerte, éste le contaba que se encargaba de lo fundamental de la señora María Eloisa, los otros hijos, le ayudaba con un vestido o pasajes, algo más poco, pero la alimentación, vivienda y el sostenimiento general de ella, se lo daba Manuel. Refiere el testigo que cuando iba a la Estrella, la demandante vivía en la casa de Esperanza –no especifica quien es-, vivía en el segundo piso de donde vivía su hijo Cesar, y hacía almuerzos para vender. No conoce que la señora María Eloisa tenga bienes propios, ni devenga salarios, pensión ni auxilios del Estado. Señaló que si bien no tenía conocimiento del monto con el cual el señor Manuel le ayudaba a su madre, éste si le decía que tenía que hacer un esfuerzo muy grande para sostener a señora con la que vivía y además sacar la parte que le pertenecía a su madre</p>
<p>Maria Cecilia Muñoz Escobar -Testigo-</p>	<p>Conoce a la demandante desde el año 1984 y a toda su familia del barrio Calatrava donde vivían. Su hijo Manuel Álvarez murió un 22 de febrero -no recuerda el año-, para ese momento vivía con la esposa Lina Salazar, quienes vivieron alrededor de 8 meses. Vivieron en casa arrendada, época en que refiere que la señora Maria Eloisa vivía en casa arrendada con 3 hijos de ella, los cuales trabajaban en vigilancia, y tenían su propia obligación pues tenían esposa e hijos, y ya después se fueron yendo; Manuel era quien pagaba el arriendo de esa casa. La demandante tuvo 3 hijas</p>

	muejres, Consuelo, Amparo y Esperanza pero no vivía con ellas. Indica que Manuel después de que se casó le daba \$200.000 mensualmente a la mamá, lo cual sabe porque Consuelo y la misma Eloisa se lo comentaban. Indica que cuando los hijos la visitaban le llevaban \$10.000, \$20.000 o \$30.000, y cuando Manuel se murió se quedó ya viviendo en casa de los hijos.
--	--

Con la demanda se acompañaron declaraciones extra juicio de Gabriel Jaime García Estrada³⁶ y María Georgina Bedoya de Arboleda³⁷, , que no ofrecieron al Aquo mayor convencimiento de los hechos discutidos en la litis, pues éstos afirmaron escuetamente que la demandante dependía económicamente de Manuel José Álvarez³⁸, sin efectuar precisión alguna al respecto, lo cual se corrobora en esta sede, habida cuenta que no fueron ser responsivos al no brindar las razones de sus dichos.

Se recibió interrogatorio de parte a la demandante advirtiéndose que no se presentó confesión en los términos del art.191 del CGP, pues respondió en consonancia con lo referido en el escrito de demanda y los dichos de la persona que fue citada como testigo.

Refiere la apoderada de UGPP que las versiones de la demandante en las dos audiencias en que se le recibió interrogatorio de parte son contradictorias, pues que en la primera de ellos indicó que vivía cerca de su hijo en una casa donde pagaba arriendo, pero en la segunda indicó que vivía en la casa con su hijo y la esposa de éste, señora Lina María; que no realizaba ninguna actividad que le generara ingresos y que su hijo era quien le colaboraba con los gastos, que era un arriendo de \$100.000 pesos; luego que también le ayudaba con alimentos y ropa; pero en interrogatorio rendido ante Colpensiones, indicó que vivía en el Municipio de Calatrava, mientras que su hijo vivía en el Municipio de La Estrella; también señaló que le arrendó una habitación a un conocido de su hijo, el cual le pagaba \$250.000 por hacerle la comida y atenderlo, además le ayudaba a su hermana realizando almuerzos, quien le reconocía entre \$1.000 a \$2.000; además se contradice la demandante con lo narrado en el escrito de demanda en el hecho 4 al afirmar que la pareja Álvarez Salazar siempre vivió en la casa materna, más indicó en este trámite que nunca vivieron en la misma casa.

Frente a las inconformidades de la recurrente, en esta sede se evidencia que:

- No se observa contradicción entre las declaraciones rendidas el 26 de octubre de 2016 y el 6 de diciembre de 2019, toda vez que la demandante aclaró que ella y su hijo vivían en casa separadas, ella por Itagüí y él por Calatrava con su esposa, no obstante, dada la condición de discapacidad de su hijo, y que su esposa, la señora Lina, trabajaba todo el día, ella se pasó a vivir cerca de él para ayudarlo a organizar y hacerle la comida; lo cual coincide con las declaraciones rendidas por los testigos citados al proceso, de donde se

³⁶ 04ExpedienteAdministrativo. Archivo denominado “00529257000000008462151005101A”.

³⁷ 04ExpedienteAdministrativo. Archivo denominado “00529257000000008462151005201A”.

³⁸ 02Expediente.pdf págs. 11/12

extrae además, que desde que falleció el esposo de la demandante, ha vivido con sus hijos y no ha tenido una vivienda estable.

- Ahora, aun cuando en el hecho cuarto de la demanda la demandante afirmo que su hijo Manuel José y su esposa Lina María vivieron en la casa materna del causante, circunstancia que acorde al recaudo probatorio se desvirtuó, por haberse acreditado que vivieron separados, dicha incongruencia por si sola no es suficiente para desvirtuar la dependencia económica de la demandante respecto del causante, pues no tiene dicha afirmación la identidad suficiente para desacreditar lo dicho por la activa en sus declaraciones.

Al respecto, ha de indicarse que la declaración de parte recibida a la hoy demandante no puede desestimarse aun cuando emana de la interesada en las results del proceso, ya que examinadas en conjunto con las versiones rendidas en éste por terceros se pueden obtener elementos para formar el libre convencimiento sobre la verdad de los hechos.

- Sobre este medio de prueba, la Corte Constitucional en sentencia C-599 de 2009, dijo: *“El interrogatorio o declaración de parte tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso, toda vez que suministra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones, y con él se busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo. (...)”*

Como pregonaba Hernando Devis Echandía sobre la declaración de la parte: *“el derecho moderno impone el requisito de someter esta prueba, como las otras, al libre criterio del juez, y, por lógica consecuencia, de restituírle su naturaleza de declaración, válida también en lo favorable al declarante, aun cuando, como es natural, sin alcance de plena prueba en esta parte y sujeta a una rigurosa y libre crítica del funcionario...”*

Para sobreabundar en este mismo sentido el Dr. Ulises Canosa Suárez, importante jurista procesal colombiano, y miembro de la comisión redactora del Código General del Proceso, sobre este medio de prueba nos ha dicho a través de la página de Juristas de la Universidad de los Andes publicada en el año 2012³⁹, lo siguiente:

“MEDIOS DE PRUEBA. Si se compara a doble columna la enumeración de los siete (7) medios de prueba típicos del artículo 175 del CPC, con los nueve (9) que trae el 165 del CGP, se encuentra que además de la independencia de la prueba por informe, el nuevo código separa la declaración de parte de la confesión, para conferir calidad de medio de prueba tanto a la confesión, como a la simple declaración de parte. En otras palabras, el saber de las partes, enaltecido por el consolidado deber de veracidad propio de la oralidad, se utiliza probatoriamente en el CGP como fuente de prueba, no sólo cuando produce consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorecen a la parte contraria, sino incluso cuando no resulta perjudicial para el declarante, como un medio de prueba libremente valorable por el juez, en conjunto, de manera articulada, esto es

³⁹ http://www.larepublica.co/el-interrogatorio-en-el-codigo-general-del-proceso_255406

con y como los demás, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La declaración de la parte, por su manifiesto interés personal en el resultado favorable, históricamente ha estado en el centro de intensas polémicas. Se rechazó su confiabilidad respecto de los hechos que benefician al declarante, especialmente en el revaluado sistema probatorio del proceso esencialmente escrito, donde se limita la eficacia probatoria de la declaración de parte a la confesión y el juramento probatorio, estimatorio o deferido por la ley.

No obstante, los modernos sistemas que adoptan la victoriosa oralidad, entre ellos el del CGP, al acrecentar la inmediación y la libre valoración de las pruebas, engrandecen el significado principal del contacto personal e inmediato del juez con las partes y prácticamente sin excepción reconocen el vigor y la eficacia probatoria de la simple declaración de parte, obtenida en un interrogatorio libre que podrá ser ordenado por el juez en cualquier momento con fines aclaratorios o de clarificación, sin perjuicio del interrogatorio formal o de absolución de posiciones que tradicionalmente era el único que se practicaba, a solicitud de los litigantes, con miras a obtener la confesión de la contraparte. En esta dirección enseñó Mauro Cappelletti: “el sujeto mejor informado de los hechos deducidos en juicio es normalmente la parte misma”. Y agregó: “no puede haber una efectiva realización de la concepción de la oralidad en un proceso en el cual no se haya valorizado plenamente el interrogatorio libre de la parte... como un examen o un coloquio de las partes ante el juez sobre los hechos de la causa, del cual el juez pueda sacar elementos para formar su propio libre convencimiento sobre la verdad de los hechos”.

Y es que, en virtud del artículo 61 del CPT. y de la SS, los jueces tienen la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos, con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio, incluso, el examen de la conducta de las partes durante el proceso. Y esa formación del convencimiento con el principio de la sana crítica implica que el juez debe fundar su decisión en aquellos elementos probatorios que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables.

De otro lado, en cuanto a lo afirmado por la recurrente en torno a que la demandante al ser una persona sola y sin hijos a cargo ni cónyuge podía vivir en condiciones dignas con 1SMLMV, y que lo aportado por su hijo Manuel más los ingresos que obtenía por los almuerzos que le ayudaba a hacer a su hermana, más lo que le brindaba a su hijo era suficiente, ha de recordarse que el alcance jurisprudencial de los dos órganos de cierre, han definido que la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta, sino que debe acreditarse que existía una subordinación económica de tal relevancia, que su ausencia afecte el mínimo sostenimiento del familiar, la dependencia económica no significa la carencia absoluta y total de ingresos o recursos por parte de quien solicita la sustitución pensional, hasta tener que probar la desprotección o abandono total, a raíz de la muerte de la causante. Basta con demostrar una afectación sustancial a las

condiciones materiales de vida o la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que permita a los beneficiarios obtener unos ingresos para vivir de manera digna⁴⁰.

En el sublite, se acreditó que el demandante le ayudaba mensualmente con un equivalente a \$200.000 lo cual destinaba a los gastos del hogar, que recibía \$250.000 por ayudarle a un amigo de sus hijos, y adicionalmente recibía \$1.000 o \$2.000 pesos por ayudarle a una hermana suya a hacer unos almuerzos para vender, suma que no resulta relevante para concluir en la no dependencia económica, por su irrisorio valor, y además porque no se acreditó con que periodicidad recibía dicha suma.

Verificada la declaración de parte rendida por la actora, cotejada con la prueba documental recaudada y con las versiones de los testigos presentados en la primera instancia, si bien no hay especificidad en cuanto al monto de ayuda que para subsistencia en vida le proveía su hijo Manuel José, de ella se extrae con certeza que, desde antes del estado de invalidez del causante, que lo fue en el año 1999, recibió ayuda relevante para su sustento de parte de su hijo Manuel José, quien si bien era casado, no tuvo hijos, y solo tuvo 8 meses de convivencia con su cónyuge veló por la subsistencia de su progenitora, quien es viuda, persona de mínima escolaridad, desempleada, sin capacitación para desempeñarse en empleo formal, sin apoyo de sus demás hijos por carecer éstos de medios económicos para brindárselo. Es de resaltar que aun cuando pudiere interpretarse precario el apoyo o ayuda económica parcial, que proveía el pensionado a la progenitora, resultaba determinante para ella con el fin de llevar una vida en condiciones dignas,

Bajo estas circunstancias, es suficiente el recaudo probatorio para avalar la conclusión a que llegó el Aquo, sobre la acreditación de dependencia económica de la señora Maria Eloisa Sánchez De Álvarez respecto de su hijo Manuel José Álvarez Sánchez, que la hace beneficiaria de sustitución pensional prevista en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13, en calidad de pensionado por riesgos profesionales.

Por tales razones, hay lugar a **confirmar** en este aspecto la sentencia venida en apelación y consulta.

B) UGPP como entidad responsable del reconocimiento de la prestación de sobrevivencia.

Confirmado el derecho que le asiste a la demandante a recibir la prestación deprecada, ha de definir la entidad a quien le asiste la obligación de asumir la carga prestacional.

Para ello, es importante recordar que el causante fue pensionado por el **ISS en el riesgo de invalidez de origen profesional** a partir del 8 de junio del 2000 mediante Resolución No. 001488 de 2000, y falleció el 23 de febrero de 2004.

⁴⁰ Sentencias T-491 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-732 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-111 de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil.

Ahora bien, Mediante Resolución 1293 del 11 de agosto de 2008, emitido la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual “se aprueba la cesión de activos, pasivos y contratos del Instituto de Seguros Sociales afectos a su actividad como Administradora de Riesgos Profesionales a favor de La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros”, se indicó en el artículo décimo que:

*“la operación de cesión comprenderá los contratos correspondientes a las afiliaciones a riesgos profesionales que se encuentran vigentes (...)
Así mismo la cesión comprenderá las cuentas por cobrar y por pagar directamente originadas en la operación de la ARP (...)
Como consecuencia de la operación y según lo previsto en el contrato de cesión que suscribirán las partes, **La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros asumirá todas las responsabilidades, conocidas y por conocer, originadas en la actividad del Instituto de Seguros Sociales como Administradora de Riesgos Profesionales**”.*

Posteriormente mediante el **artículo 80 de la Ley 1753 de 2015** se dispuso lo siguiente:

“PAGO DE PENSIONES DE INVALIDEZ RECONOCIDAS POR POSITIVA. Las pensiones que actualmente están a cargo de Positiva S.A., cuyos derechos fueron causados originalmente en el Instituto de Seguros Sociales, serán administradas por la UGPP y pagadas por el FOPEP, previo el traslado de la reserva actuarial correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.”

Artículo que fue reglamentado por el **Decreto 1437 del 30 de junio de 2015**, el cual establece en el artículo 1° lo siguiente:

“Asignación de Competencias. A partir del 30 de junio de 2015, las pensiones que actualmente están a cargo de Positiva Compañía de Seguros S.A. cuyos derechos fueron causados originalmente en el Instituto de Seguros Sociales serán administradas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP y a partir del mes siguiente se efectuará el respectivo pago a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional –FOPEP” (subraya fuera del texto).

Así, encontrando que, en virtud de las funciones legalmente asignadas como sucesora de las prestaciones que estuvieron a cargo Positiva S.A cuyos derechos fueron causados originalmente en el ISS, la **UGPP está obligada a reconocer sustitución pensional deprecada a la aquí demandante**, razón por la cual se **CONFIRMARÁ** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación y consulta

c) Disfrute y valor de la mesada pensional

Manuel José Álvarez Sánchez falleció el 23 de febrero de 2004 por lo que a partir del día siguiente se causó la prestación. Se desprende de la documental allegada al plenario,

que la demandante radicó requisitos para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia el 3 de agosto de 2006⁴¹; posteriormente el ISS mediante auto N° 02956 del 4 de mayo de 2009, negó la pensión de sobreviviente bajo el argumento que ésta no se acercó a radicar solicitud de reconocimiento de la prestación⁴².

La demanda fue radicada el 24 de septiembre de 2014⁴³, por lo que operó el fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales no reclamadas con anterioridad al 24 de septiembre de 2011, según lo dispuesto en los arts.488 del CS y 151 del CPTSS, por lo que hay lugar a **confirmar** en este aspecto la decisión del A Quo.

Se pagarán catorce (14) mesadas anuales, porque al fallecimiento, el causante era pensionado por invalidez desde el año 2000, con base al SMLMV.

UGPP adeuda la suma de Ciento Ocho Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos (\$108.728.835), actualizados al 30 de septiembre de 2022, discriminada como se indica a continuación:

AÑO	VALOR MESADA	N° MESADAS	VALOR
2011	\$ 535.600	4 meses y 7 días	\$ 226.373
2012	\$ 566.700	14	\$ 7.933.800
2013	\$ 589.500	14	\$ 5.403.750
2014	\$ 616.000	14	\$ 8.624.000
2015	\$ 644.350	14	\$ 9.020.900
2016	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	\$ 1.000.000	10	\$ 10.000.000
			\$ 108.728.835

En 2022 continuará pagándose la mesada en un Millón de Pesos (\$1'000.000), sin perjuicio de los aumentos anuales de ley.

Se autorizará a la demandada que, sobre el retroactivo de mesadas de pensión de sobrevivientes adeudadas y las que en lo sucesivo se causen, descuente el valor de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y a lo decantado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en esta materia Salud⁴⁴.

⁴¹ 02Expediente.pdf pág. 93

⁴² 02Expediente.pdf págs. 101/103

⁴³ 02Expediente.pdf pág. 8

⁴⁴ Ver entre otras las SL18980 de 2017, SL1085 de 2019, SL 1016 de 2020 y SL 10759 de 2020.

Al no poder obligarse a los acreedores a recibir lo adeudado en un valor devaluado por efecto de fenómenos como la inflación, el retroactivo pensional adeudado y el que se cause en adelante, se indexará a la fecha del pago, empleando la siguiente fórmula, avalada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, así:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que se efectúe el pago de cada mesada adeudada;

El ÍNDICE INICIAL corresponde al de la fecha en que causó cada mesada pensional.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada mesada pensional objeto de indexación.

En tal aspecto se **confirmará** la sentencia de instancia.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la demandada han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción que prosperó parcialmente, como se indicó líneas atrás.

IV. COSTAS

Costas en esta sede a cargo de la UGPP por haber resultado vencida en su recurso de alzada. Agencias en derecho se fijan en el equivalente a 2 SMLMV.

No se acogerá lo recurrido por UGPP en torno a ser absuelta de las costas de primera instancia, por tratarse de una condena objetiva que debe asumir al haber sido vencida en juicio.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 6 de diciembre de 2019, en el proceso ordinario laboral de doble instancia, promovido por María Eloisa Sánchez de Álvarez contra Colpensiones, UGPP, Positiva S.A. y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO. Actualizar el retroactivo pensional que adeuda UGPP a la demandante en la suma de Ciento Ocho Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos (\$108.728.835), liquidados entre el 24 de septiembre de 2011 al 30 de septiembre de 2022.

TERCERO: Costas a cargo de la UGPP. Agencias en derecho se fijan en el equivalente a 2 SMLMV.

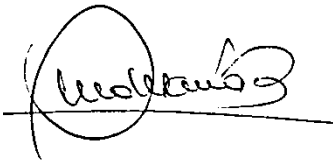
Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
(En ausencia justificada)